



Distrito Especial Santiago de Cali, 30 de julio de 2023.

Doctor

CARLOS EDUARDO CHAVES ZÚÑIGA.

JUEZ VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI.

E.S.D.

Referencia: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

Radicación de Expediente: 76001-33-33-021-2023-00163-00

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Demandante: E.P.S. SURAMERICANA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ CALI.

NANCY MAGALI MORENO CABEZAS, domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, con cédula de ciudadanía No. 34.569.793 exp. En Popayán (Cauca) y Tarjeta Profesional de Abogada No. 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la **NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL** en el proceso citado en la referencia, según poder que me fuera conferido, el cual me permite allegar al Despacho con sus respectivos anexos, otorgado por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Doctora LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, quien actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 103 numeral 7 de la Ley 270/96, nombrada mediante Resolución No. 6141 del 17 de junio de 2024, emanada de la Dirección Ejecutiva Administración Judicial, posesionada mediante acta de fecha 4 de julio de 2024; encontrándome dentro de la oportunidad legal, teniendo en cuenta que la demanda fue notificada el 13 de junio de 2024, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

Pretendiendo el extremo activo:

1. La nulidad de la Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Cali, notificada el mismo 16 de febrero de 2022, a través del cual se ORDENÓ a la EPS SURA, el reintegro del monto por valor de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$23.453.902,00) M/Cte.
2. La nulidad de la Resolución No. DESAJCLR22-2806 21 de septiembre de 2022, que decidió modificar parcialmente el artículo 1 de la Resolución No. DESAJCLR22-146, decidiendo que el reintegro debía ser por la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$14.914.045,00)
3. Resolución No. RH 5931 del 21 de noviembre de 2022, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, notificada el día 22 de noviembre de 2022 de establecer que la deuda real a pagar por parte de la EPS SURAMERICANA S.A. sigla EPS SURA con Nit 800088702-2, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, es por la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML (\$13.491.838) por el cobro derivado de incapacidades, licencias de maternidad o paternidad otorgadas a los servidores judiciales afiliados a la EPS, durante el periodo comprendido entre el enero y diciembre de 2020



4. La terminación del proceso de cobro coactivo, bajo el argumento de que ni la Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, ni ninguno otro en que se hubiere sustentado la decisión ahí advertida, hace las veces de título ejecutivo y, en consecuencia, de ningún modo resultaría viable su cobro mediante las citadas vías.
5. El reintegro en su totalidad, el valor pagado más los intereses corrientes causados desde el momento del pago, hasta el momento del reintegro efectivo.

A LAS PRETENSIONES

Al respecto manifiesto que me opongo a todas las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Desde los inicios el proceso de cobro coactivo incluyó los montos incluyendo las resoluciones modificatorias del acto administrativo inicial, esto es la Resolución DESAJCLR22-146 del 16 de septiembre de 2022.
2. La NACIÓN- RAMA JUDICIAL, sí es competente para el inicio de los procesos de cobro coactivo, es decir, que la afirmación anotada por la parte actora “de ningún modo resultaría viable su cobro mediante las citadas vías.”; no se ajusta a la realidad imperante en nuestro ordenamiento jurídico por cuanto, es importante retrotraernos a lo estipulado en los artículos 112 y 136 de la Ley 6° de 1992, los cuales establecen que las entidades públicas del orden nacional y en particular la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial- Cali, están facultadas para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor y de la Nación.

Por lo que desde ya, se desvirtúa la duda sobre la competencia de mi representada para adelantar el proceso de cobro coactivo que se complementarán en el acápite de fundamentos de derecho; aunado a que el concepto de la violación en la cual se funda la presente demanda no se encuentra soportado en ninguna vulneración por parte de la RAMA JUDICIAL DESAJ.

Por lo que fundadamente se solicita desde ya, se nieguen las pretensiones de la demanda.

A LOS HECHOS

1. **AL HECHO 1.**, es parcialmente cierto, es cierto que el 16 de febrero de 2022 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, expidió la Resolución No. DESAJCLR22-146, cuyo artículo primero ordenó a mi representada, EPS SURAMERICANA S.A., el reintegro de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS (\$23.453.902) M/Cte., por concepto del supuesto adeudo de prestaciones económicas derivadas de incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad, correspondiente a la vigencia del año 2020.

No es cierto lo siguiente: No es justificable la afirmación de la parte actora cuando manifiesta que: “No obstante, el acto administrativo omitió señalar la fecha exacta en que cada una de las prestaciones fueron radicadas ante la EPS SURA”, teniendo en cuenta que el reporte de las incapacidades adeudadas por la Eps SURAMERICANA S.A. – EPS SURA, deviene del módulo de incapacidades del Sistema de Liquidación de Nómina Kactus; así que es información con la que previamente cuenta la E.P.S. y dicho argumento teniendo en cuenta el antecedente no enerva la obligación que tenían de realizar el pago cuyo recobro pretende sea anulado a través de este medio de control.



Las incapacidades cuyo recobro fueron incluidas en los actos administrativos reprochados, han sido radicadas oportunamente ante SURAMERICANA S.A. – EPS SURA, por medio del portal web de esa entidad, que la EPS, igualmente conoce por lo que dicho argumento no sustenta la declaratoria de nulidad pretendida por oposición, se constituye en una afirmación dolosa por parte de la entidad.

No obstante, dentro del contenido del acto administrativo RESOLUCIÓN No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, se pueden advertir las gestiones realizadas por la entidad, para el pago de los recobros que hoy pretenden sean anulados.

2. **AL HECHO 2.** No es cierto, las resoluciones acusadas están fundadas las normativas que obligan a la entidad y que son aplicables al caso concreto; los seguimientos y auditorías, son evidencias de los hallazgos o posibilidades de mejora, no debemos olvidar que todas las entidades estatales son objeto de evaluación y seguimiento, máxime cuando se trata de recursos públicos como en el presente asunto.

Frente al argumento de que es insuficiente fundamentos de Derecho de los actos administrativos acusados, el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 112 del Decreto 111 de 1996, debo señalar que los actos administrativos que se acusan, no solo tuvieron el sustento señalado por la parte actora, no es cierto; respecto de la Ley 270, deberé indicar:

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:

1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Seccional de la Judicatura, excepto los que sean de libre nombramiento y remoción de cada Magistrado y aquéllos cuyo nombramiento corresponda a una Sala.
5. Elaborar y presentar al Consejo Seccional los balances y estados financieros que correspondan.
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
7. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.
8. Conceder o negar las licencias solicitadas por el personal administrativo en el área de su competencia.
9. Solicitar a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para la protección y seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
10. Enviar al Consejo Superior de la Judicatura a más tardar en el mes de diciembre de cada año, los informes, cómputos y cálculos necesarios para la elaboración del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial del año siguiente. Así mismo emitir los informes que en cualquier tiempo requiera dicha Sala; y,
11. Las demás funciones previstas en la ley, los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.

Si fuera de las normas concretas relativas a las incapacidades, las obligaciones contenidas en los numerales 2, 5 y 6 del art. 103 de la Ley 270 de 1996 no son fundamento que coadyuven al sustento de los actos administrativos que se acusan, qué lo será, pues precisamente en aras de dichas normativas, la Dirección Ejecutiva debe velar por los recursos de la entidad.

3. **FRENTE AL HECHO 3.** Es un derecho de lo administrados, recurrir las providencias que les resuelvan situaciones particulares y concretas.



Olvidó la parte actora que el monto inicial (VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$23.453.902,00)M/Cte.) fue modificado quedando finalmente el valor *TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML (\$13.491.838)* como suma dineraria para efectos del recobro que en la actualidad ya fue pagado por la demandante.

4. **FRENTE AL HECHO 4.** Es cierta la modificación de la Resolución en favor de la hoy demandante, precisamente en garantías del Debido Proceso que le asiste y de la administración el reponer o modificar una decisión para el caso concreto en favor del administrado.
5. **FRENTE AL HECHO 5.** Es cierto, el superior, revisó la actuación y determinó montos inferiores, lo que está dentro de las competencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ.; ello no debe ser óbice para que se acceda a las pretensiones de esta demanda.
6. **FRENTE AL HECHO 6.** Me atengo a la prueba que obra en el expediente.
7. **FRENTE AL HECHO 7.** No es cierto, que la RAMA JUDICIAL obliga a pagar una obligación que no se encuentra ajustada a derechos y los lineamientos legales. Ni que se encuentre ejecutando de manera errónea la aplicación de recursos públicos – recursos de la Seguridad Social para el pago de prestaciones económicas que administra esta EPS, los cuales están regulados de manera específica y puntual en cuanto a las formas de efectuar su respectivo trámite de pago, constituyendo el ítem de: “destinación taxativa”.

Tal afirmación delicada, debiera estar soportada en sustento probatorio que la parte no ha arrimado al proceso.
8. **FRENTE AL HECHO 8.** Ante el impago por parte de la E.P.S. SURA, ante los diferentes y reiterados requerimientos, la RAMA JUDICIAL sustentada en sus competencias legales, inició el proceso de cobro coactivo.
9. **FRENTE AL HECHO 9.** Es cierto que se propusieron medios exceptivos, la parte demandante estaba en su derecho legal de proponerlos, no obstante, no tenían sustento para su prosperidad.
10. **FRENTE AL HECHO 10.** Se itera, no tenían vocación de prosperidad los medios exceptivos propuestos por la hoy demandada.
11. **FRENTE AL HECHO 11.** Es cierto que se agotó el requisito de procedibilidad, carga de la parte actora.
12. **FRENTE AL HECHO 12.** Es cierto que se llevó a cabo la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría.

RAZONES DE DEFENSA Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. No es susceptible de modificación por la RAMA JUDICIAL que para el reconocimiento y pago de las incapacidades por enfermedad general, licencias de maternidad y paternidad se encuentran en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, artículo 28 de la Ley Decreto 2943 de 2013, artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1333 de 2018.



El artículo 206 de la Ley 100 de 1993, establece:

ARTÍCULO 206. *Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.*

A su vez, el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012, prescribe:

ARTÍCULO 121. *Trámite de reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.*

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia.

2. El artículo 1º de la Ley 1066 de 2006, “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, prescribe:

“ARTÍCULO 1o. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. *Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.”*

Subsiguientemente el artículo 2 ibidem, señala:

“ARTÍCULO 2o. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN CARTERA A SU FAVOR. *Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”.*

El artículo 5 de la precitada normativa dispone:



“ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”

De conformidad con las normativas transcritas, se infiere que el procedimiento es el establecido en el Artículo 823 E.T. y siguientes, no obstante, en caso de presentarse vacíos en la interpretación de sus normativas y no estén expresamente descritos en el citado Estatuto, estas serán resueltas por las normas del Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Es preciso señalar que el Título IV de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a partir del artículo 98, establece el “DEBER DE RECAUDO Y PRERROGATIVA DEL COBRO COACTIVO, señalando:

“Las entidades públicas definidas en el párrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.”.

El artículo 99, alude a qué DOCUMENTOS PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO A FAVOR DEL ESTADO, señalando que “Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible”, enunciando:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el párrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.
2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el párrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.
3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.
4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.



Ninguno de los anteriores aspectos, han sido omitidos por la NACIÓN RAMA JUDICIAL, es por ello que no han sido desvirtuados por la parte actora para este momento procesal, es decir, están en concordancia con las normativas transcritas

De lo anterior se concluye que los actos administrativos contentivos de obligaciones a favor del Nación – Rama Judicial son exigibles a partir de su notificación al deudor, actuación que se surtió de conformidad con la ley, agotado el trámite en sede administrativa; vencido el término otorgado para el pago sin que se hubiere satisfecho la obligación a cargo de la demandante, se trasladó a la dependencia de cobro coactivo con el fin de hacer efectivo el derecho.

No se advierte ninguna ilegalidad en el trámite de cobro coactivo adelantado por la NACIÓN- RAMA JUDICIAL, como empleador cotizante y que dicho cobro tiene sustento en lo establecido en la Ley 100 de 1993 y preceptivas normativas a las cuales se está haciendo alusión, se constituye en un imperativo legal de realizar el recobro a la hoy demandante EPS, de las prestaciones económicas que para el caso concreto son: Incapacidades, licencias de maternidad, licencias de paternidad, que efectuó sin ser de su cargo, a efectos de que no se incurra en un detrimento patrimonial por la indebida apropiación de los recursos del Estado o Nación, por cuanto no media causa alguna que justifique la pérdida de las sumas dinerarias que en derecho le corresponden a mi representada.

Como se ha expuesto, la entidad adoptó como procedimiento idóneo para obtener el reintegro de estas prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud, acudir al cobro por vía coactiva, cuando por cuanto las actuaciones previas (Trámite administrativo y cobro persuasivo) no surtieron ningún efecto; se itera que las sumas dinerarias a recobrar ostentan la naturaleza de públicas, máxime cuando están dirigidos a preservar y cuidar los dineros que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; aunado a lo anterior, que como se dijo en líneas precedentes, el acto administrativo que ordena el recobro es expedido por quien está facultado legalmente y sobre las actuaciones que para esta etapa procesal son primigenias, no obra prueba de vulneración o transgresión de nuestro ordenamiento jurídico

4. El Título VII, Capítulo 5, Artículo 209 de nuestro ordenamiento superior dispone: ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

5. Ley 6 de 1992 en su artículo 136, señala:

ARTÍCULO 136. Facultad de cobro coactivo para la Dirección Nacional de Administración Judicial. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, la Dirección Nacional de Administración Judicial tiene jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigidos a su favor y de la Nación, para lo cual otorgará poder a funcionarios abogados de dicha entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados.

6. Concomitante con lo anterior, el Decreto 4473 de 2006, prescribió:

Artículo 1°. Reglamento interno del recaudo de cartera. El reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad.



Artículo 2°. Contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de cartera. El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad.
2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva.
3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor entre otras.

Es decir, que está plenamente justificada la jurisdicción coactiva, en cabeza de la entidad que represento, a través de la cual se realizó el cobro de las sumas dinerarias a la demandante; a su vez, se tiene que el acto administrativo que dispuso el cobro, se encontraba debidamente notificado y ejecutoriado.

7. Entendiendo la obligación que la asiste a la parte actora, a la fecha ya ha realizado el pago de las sumas dinerarias en las que se funda la presente demanda.
8. **Frente a la motivación de los actos administrativos acusados, se** señala que los mismos están en concordancia con las normativas que les son aplicables, normativas que están vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico

EXCEPCIONES

1. **AUSENCIA DE CAUSA PETENDI PARA DEMANDAR:** Los actos demandados son acordes a las normativas vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la competencia para adelantar cobro persuasivo o coactivo es reglada y le permite a la entidad ante la omisión de quien tiene la obligación del pago y ha sido incumplido, adelantarlos para recobrar las sumas dinerarias de carácter público que está llamada a recaudar.
2. **LA INNOMINADA O GENÉRICA:** Solicito comedidamente, se declare cualquier excepción que el juzgador encuentre acreditada en el presente proceso, aunque no sea alegada, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 187 inciso 2°. del CPACA.

PETICIONES

Respetuosamente solicito a su señoría:

1. Que se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda, por las razones de hecho y de derecho expuestas en este escrito.
2. De manera subsidiaria, se itera que se declaren probada las excepciones propuestas en la presente contestación de la demanda o *cualquier otra que encuentre probada*, aunque no hubiese sido propuesta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 inciso segundo del C.P.A.C.A., además de lo anterior, se tenga en cuenta la fecha de vinculación de la parte actora, los ausentismos y las sumas dinerarias que deban ser descontadas para el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral en lo pertinente.

PRUEBAS

Sírvase su señoría, tener por su valor probatorio las allegadas legal y oportunamente, a su vez.



Se allegan los antecedentes administrativos que fueron remitidos por la entidad.

- 1.COMUNICACIÓN RESOLUCION No. RH- 5931
- 2.RV_ NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA - RESOLUCIÓN No. DESAJCLR22-2806 SURA EPS
- 3.NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
- 4.DESAJCLR22-146 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN REINTEGRO
- 5.DESAJCLR22-2806 RESUELVE REP Y CONCEDE APELACIÓN
- 6. RECURSO DE REPOSICIÓN
- 7. RES. No. RH - 5931- 2022 RESUELVE RECURSO

OPOSICIÓN A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA.

- 1. La declaración de parte del representante legal, por ser inconducente.
- 2. Frente a la declaración de parte de la Dra. CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, la prueba se encuentra prohibida por cuando la confesión de los representantes legales de entidades estales no tiene validez alguna, así lo dispone la Ley 1437 de 2011 en su artículo 217, en concordancia con el Código General del Proceso en su articulo 195; por lo que se trataría de una prueba ineficaz o no valida.
- 3. Frente al testimonio del señor DIEGO FERNANDO RONDÓN CANO, el cobro de prestaciones económicas derivadas de incapacidad y licencias de maternidad y/o paternidad, es reglado, por lo que se trata de una prueba impertinente e inconducente.

Respetuosamente así esperamos que lo considere el Despacho.

ANEXOS

- 1. Poder que me fuera otorgado por la señora Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Cali, con sus respectivos anexos.

TRAZABILIDAD DE PODER



2 poder E.P.S. SURAMERICANA.pdf Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

República de Colombia Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali-Valle del Cauca

DESAJCLR024-3801
Santiago de Cali, julio 29 de 2024

Doctor
CARLOS EDUARDO CHAVES ZÚNIGA,
JUEZ VENTUENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI.
E.S.D.

Referencia: MEMORIAL PODER.
Radicación de Expediente: 76001-33-33-021-2023-00163-00
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Demandante: E.P.S. SURAMERICANA.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ CALI.

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, mayor de edad, con domicilio en el Distrito Especial Santiago de Cali (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No. 66.812.824 de Cali - Valle, en mi calidad de Directora Ejecutiva de la NACIÓN RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL CALI, nombrada mediante Resolución No. 6141 del 17 de junio de 2024, emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, posesionada mediante acta de fecha 4 de julio de 2024, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996 artículo 103 numeral 7, confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada NANCY MAGALI MORENO GABEZAS, profesional de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - División de Procesos, con Cédula de Ciudadanía No. 34.589.793 de Popayán (Cauca) y Tarjeta Profesional de Abogada No. 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura, para que asuma la representación y defensa de los intereses de la NACIÓN RAMA JUDICIAL DESAJ CALI en el proceso citado en el asunto. La dirección de correo electrónico de la apoderada es galdesvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co

La apoderada queda facultada para desistir, sustituir, conciliar en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente la facultad de recibir.

Finalmente se recuerda, que la UNICA dirección electrónica para efectos de notificaciones oficiales a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), es dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Sirvase su señoría, reconocer personería a la apoderada en los términos del presente memorial poder.

Atentamente,

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO.
C.C. No. 66.812.824 de Cali
Directora Ejecutiva Seccional Cali – Valle

Acepto:

poderes

Lorena Ivette Mendoza Marmolejo

Para: Apoyo Legal 04 - Valle del Cauca - Cali

1 poder JHON JAIR SEGURA ...
347 KB

2 poder E.P.S. SURAMERICA...
353 KB

2 archivos adjuntos (701 KB)

Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judi

Descargar todo

Buenas tardes,

Dra. Nancy Magali, remito poderes firmados.

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO
Directora Seccional de Administración Judicial
Cali - Valle del Cauca

NOTIFICACIONES

Se informa que la demanda y sus anexos fue remitida a la contraparte.

Correo oficial para notificaciones judiciales: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

Atentamente,

NANCY MAGALI MORENO CABEZAS

C.C. No. 34.569.793

T.P. 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura.

Cel. 3164900473

Mi correo institucional: galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co